

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Que el abogado Francisco Salmona Maureira, por la demandada Universidad Central de Chile, recurre de nulidad contra la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT N° T-1789-2018, caratulada “Núñez con Universidad Central de Chile”, sobre tutela y, en subsidio, despido injustificado, en que se acogió la denuncia por tutela laboral, indemnización por daño moral y cobro de prestaciones laborales, declarando que se vulneró la integridad física y psíquica y la honra del actor, y se condenó a la demandada a pagar a la demandante las prestaciones que indica, más intereses y reajustes, con costas.

Funda su recurso como sigue: 1) como primera causal la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal interior; 2) de forma conjunta con la primera causal, pero de manera simplemente simultánea, según manifiesta, la causal de la letra e) del artículo 478, en relación con el artículo 459 N° 4, ambas del mismo cuerpo legal; 3) en subsidio de estas causales, la del artículo 478 letra b), esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; 4) en subsidio de la primera causal, la del artículo 477 cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; 5) en subsidio de esta causal, la de la letra e) del artículo 478, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el N° 4 del artículo 459, en este caso, con falta de análisis de toda la prueba rendida y de los razonamientos que conducen a tal estimación; 6) de forma conjunta con las causales referidas en los números 4 y 5 anteriores, pero de manera simplemente simultánea según hace ver, la causal del artículo 478 letra e), esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el N° 4 del artículo 459, en particular, con falta de análisis de toda la prueba rendida; 7)



finalmente, y conjuntamente con la causal precedente, aquella de infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ambas causales teniendo por objeto impugnar el monto al que se condenó a pagar a la demandada por concepto de la indemnización legal por años de servicios, el recargo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo y la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Pide que se invalide la sentencia, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que, en definitiva, declare: (i) Que se acoge la primera causal de nulidad de su recurso, estableciéndose que la Universidad no vulneró las garantías fundamentales de la integridad física y psíquica y de la honra del actor y, en consecuencia, que se rechace la denuncia por vulneración de garantías fundamentales, demanda de indemnización de perjuicios y demanda por despido indirecto. (ii) Que, conjuntamente con la causal anterior, se acoge la segunda causal de nulidad señalada o, en subsidio de ella, que se acoge la tercera causal invocada, y, en cualquiera de los dos casos, que se declare que nada se adeuda al actor por concepto de la Asignación de Dirección demandada. (iii) Que, en caso de desestimarse la primera causal de nulidad, se acoge la cuarta causal señalada o, en subsidio de ella, que se acoge la quinta causal de nulidad y, en cualquiera de los dos casos, que se rechace la demanda por indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta por el denunciante. (iv) Que, conjuntamente con lo solicitado en el número anterior, se acogen la sexta y séptima causales alegadas y, en consecuencia, se decrete que le corresponde al actor la suma de \$ 22.117.167, por concepto de indemnización legal por años de servicio; de \$ 2.457.463, por concepto de la indemnización sustitutiva del aviso previo; y \$ 11.058.584, por concepto del recargo legal establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo; y (v) Que se condene en costas al denunciante.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, a la que asistieron los abogados de ambas partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que, en relación a la primera causal, aquella del artículo 478 letra c), la recurrente afirma que la separación del actor

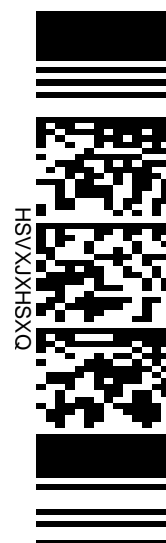


no es una medida desproporcionada, sino que, por el contrario, se trata de una medida idónea, necesaria y proporcional, que no vulneró sus garantías fundamentales.

Indica que atendido lo dispuesto por el tercer inciso del artículo 485 del Código del Trabajo, la judicatura debe emplear el principio de proporcionalidad para resolver los conflictos de garantías fundamentales que se verifiquen en el contexto de una relación de trabajo. De este modo, frente a estas situaciones, el ejercicio que debe realizar el juzgador para efectos de determinar si una determinada medida ejecutada por el empleador es o no legítima, se remite, en última instancia, al resultado que se obtenga de aplicar el principio de proporcionalidad y los tres subprincipios que lo componen: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dicho lo anterior, asevera que las razones jurídicas que permiten concluir, sin modificar un ápice los hechos asentados en la sentencia, que la medida de separación del actor no se trató de una acción desproporcionada que haya afectado sus garantías fundamentales.

Sostiene que la separación del actor del ejercicio de sus labores se trató de una medida idónea, puesto que, perseguía un fin legítimo y, además, era adecuada para alcanzar esa finalidad, por cuanto hace ver que el contexto en el que se verificó su separación fue uno de carácter excepcional, pues esta medida fue implementada mientras en la Universidad se verificaba la “toma feminista”, escenario en el que el alumnado manifestó su descontento, incluso de forma violenta por lo que, frente a la presión que ejercieron sus alumnos, la Universidad acordó con la entidad que los representaba adoptar una serie de medidas que buscaban satisfacer las legítimas demandas que ellos manifestaban y que, por lo demás, no solo afectaron a su representada, sino que a diversas universidades a lo largo del país.

Una de las medidas que se acordó implementar con la “Asamblea de Mujeres e Identidades no Heterosexuales”, fue la de iniciar un proceso de investigación para todos aquellos casos que fueren denunciados por los alumnos por actos que se riñeran con la moral. Este fue el caso del actor, quien fue denunciado por cinco personas distintas en la Sesión Extraordinaria N°35, de fecha 20 de



junio de 2018, atendido lo cual señala que la primera medida que se adoptó en el contexto de esta investigación fue separar provisionalmente al denunciante de las funciones que requerían su presencia al interior de las dependencias de la Universidad. Esta acción se materializó mediante la figura de un permiso pagado por 30 días. La medida de separar provisionalmente al actor, así como a todos los trabajadores que fueron denunciados, tenía un doble objetivo: por un lado, buscaba proteger a las personas que habían formulado las denuncias, para que no se vieran afectadas en sus derechos mientras se determinaba el curso a seguir por parte de la Universidad; pero también, y más importante aún, buscaba proteger la propia integridad física y psíquica del actor, quien frente al escenario por el que atravesaba la Universidad estaba expuesto a sufrir diversos actos de violencia de parte del alumnado.

En el caso del actor, indica que una vez vencido el permiso y ante la reticencia del propio actor a renovarlo, fue víctima de una “funa” de parte de los alumnos. Adicionalmente, los alumnos, ante la presencia de Núñez en la Universidad, colgaron un pendón o lienzo en el que se sindicaba al denunciante como uno de los trabajadores de la Universidad que habían incurrido en conductas reprochables contra el alumnado. De este modo, lo que quiso hacer la Universidad con la medida de separar provisionalmente de sus funciones al actor fue precisamente protegerlo y no someterlo a stress que planteaba una situación de excepción como la que se verificó en la Universidad a mediados del año 2018.

De lo que expone asegura que es evidente que la separación del actor efectivamente tenía el carácter de idónea, pues, en primer término, buscaba una finalidad legítima: proteger tanto a las personas que realizaron las denuncias y también al actor, quien, atendido el contexto que existía en la Universidad, podía ser -e incluso fue, una vez vencido el permiso- víctima de actos violentos en su contra por parte del alumnado. De otro lado, también esta medida era adecuada para lograr la finalidad que se perseguía: hacer que el actor no se viera enfrentado a los actos ya señalados, ambos fines respaldados constitucionalmente.

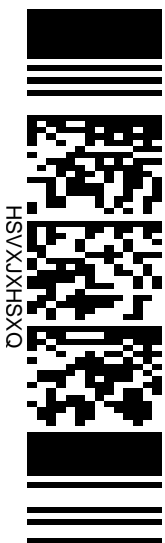
Sostiene que la separación de funciones del denunciante, además, era una medida necesaria, ya que se trataba de la opción



menos gravosa que le cabía a la Universidad, al precisamente convenir un permiso con goce de remuneraciones con el actor, pues, de ese modo, se evitaba que se viera expuesto a sufrir alguna represalia por parte del alumnado y, en segundo lugar, no se veía mermados sus ingresos. En este sentido, asegura que el juez a quo incurre en un evidente error de calificación al considerar esta medida como una “sanción”, puesto que los antecedentes allegados al proceso no permiten otorgar a esta medida tal carácter, ya que no se trató de un acto unilateral del empleador que emanó de su facultad disciplinaria, sino que de un acto jurídico bilateral, en el que consta la aquiescencia de ambas partes, Universidad y denunciante, y en el que las dos acordaron suspender temporal y parcialmente la relación laboral que las unía.

Luego asevera que la separación de funciones del actor se trató de una medida estrictamente proporcional, por cuanto tiene como antecedente las denuncias que se formularon en su contra. Estas denuncias eran por diversos motivos, y dentro de ellos se encontraban posibles actos cometidos por el actor que tenían una connotación de carácter sexual y de abuso de poder. Así, la separación de funciones del actor tiene un antecedente, no se trata de una medida arbitraria o “porque sí”, adoptada por la Universidad. Para estos efectos, estima indiferente -y cuestionable- que se adoptare esta decisión sopesándose el tenor de las denuncias. Reitera que lo importante era proteger la integridad física y psíquica tanto de las denunciadas como del denunciado. Y agrega que la separación del denunciante no tuvo como consecuencia que se viera afectado en su derecho de defensa en el contexto del procedimiento de investigación que se inició por la Universidad a raíz de las denuncias que se formularon en su contra.

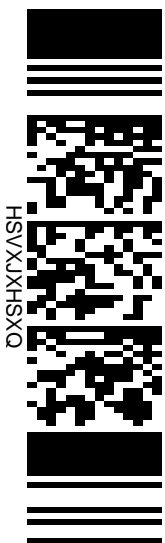
En cuanto a la segunda causal de la letra e) del artículo 478, invocada de forma conjunta con la primera, señala que la sentencia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 459 del Código del Trabajo, esto es, no contiene un análisis de toda la prueba rendida, puesto que no contiene el análisis de toda la prueba rendida que resultaba atinente para resolver si correspondía pagar al actor la “Asignación de Dirección”. En efecto, la juez a quo, en este punto, ha incurrido en una fundamentación parcial o incompleta, ya que,



para dar lugar al pago de esta prestación, no analizó los medios probatorios aportados por esta parte en esta materia, lo que afirma queda en evidencia de la simple lectura del considerando décimo segundo de la sentencia.

Sostiene que en esta parte de la sentencia la juez del grado da por acreditado que su representada adeudaba al actor la suma de \$19.776.695 por concepto de “Asignación de Dirección”, cuestión que funda en los siguientes medios probatorios: (i) correo electrónico de 8 de enero de 2018, en el que el actor solicita el pago de la mitad de los excedentes obtenidos por el “Diplomado de Arquitectura de Información y Experiencia de Usuario”, puesto que existiría un antecedente correspondiente al presupuesto del diplomado del año 2014 en el cual aparece el pago de tales excedentes a la persona jurídica “Grupo Plan C”; y (ii) en que tanto quien compareció como absolvente de la Universidad y el testigo, don Sergio Campos, no habrían aportado antecedente en relación con este pago. Manifiesta que la juez a quo no analizó la prueba aportada por su parte en materia de “Asignación de Dirección”. Más allá del que considera evidente error conceptual de la juez a quo al considerar como prueba suficiente un documento en el que el pago se realiza a una persona jurídica y no a la persona del demandante, es posible advertir que la sentenciadora no analizó ninguno de los medios probatorios incorporados por su parte y que eran atinentes al asunto controvertido, en circunstancia que en la audiencia de juicio su parte incorporó una serie de documentos que se referían a los presupuestos aprobados por la Universidad para cada año en que se realizaba Diplomado; también se incorporaron liquidaciones de remuneraciones del denunciante; y la prueba testimonial del Gerente de Finanzas de la Universidad, toda la cual no fue analizada por la sentencia y que, afirma, reflejan la inexistencia de la obligación reclamada por el actor.

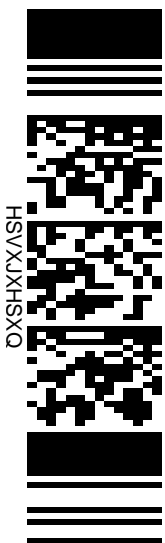
En cuanto a la tercera causal, la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, interpuesta de forma subsidiaria de la segunda, afirma que la sentencia se dictó con infracción manifiesta de las normas de apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.



Sostiene que la juez del grado, al condenar a su representada al pago de una “Asignación de Dirección” ascendente a la suma de \$19.776.695, incurre en una infracción a las reglas de la lógica, por falta de coherencia, en particular por incurrir en una contradicción en el establecimiento de los hechos que se dan por acreditados, como también por inconsistencia en la derivación por la existencia vacíos en la cadena de inducción. En este sentido, indica que la sentencia señala que se habría acreditado la existencia de la prestación y de su acreencia en favor del actor, tomando en cuenta para ello el correo electrónico de 8 de enero de 2018, en el cual señala que existiría un “precedente” de la repartición de excedentes con la empresa “Grupo Plan C”. A continuación, sostiene que es el demandante, una persona natural, el acreedor de las sumas que demanda. De este modo, existe una evidente contradicción entre el contenido del elemento probatorio utilizado por la sentencia y la conclusión que la jueza desprende del mismo, puesto que, si el documento señala de forma expresa que la repartición es en favor de la empresa “Grupo Plan C”, no puede a la vez ser beneficiario de éstos una persona natural como el actor, de modo tal que asegura que estas afirmaciones resultan del todo incompatibles e incongruentes.

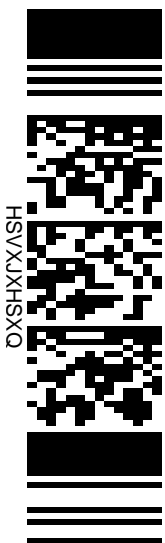
Manifiesta que las infracciones en las que incurre la juez del grado son manifiestas, puesto que basta de la sola lectura del considerando décimo segundo de la sentencia, para determinar una clara contradicción entre el medio probatorio y la conclusión que de éste se desprenda, como también una falta de derivación lógica entre uno y otro.

En relación a la cuarta causal, que alega en subsidio de la primera, y que consiste en infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en los términos del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 489 del mismo cuerpo legal y el artículo 2331 del Código Civil, por incurrir la sentencia en una infracción de ley, vicio que estima se configura, por una parte, por la errónea interpretación de la naturaleza jurídica de la indemnización especial contenida en el artículo 489 del Código del Trabajo y, por la otra, por la contravención del artículo 2331 del Código Civil, al indemnizar pecuniariamente los perjuicios ocasionados a la honra.



Por una parte, señala que la indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo tiene una naturaleza jurídica compensatoria. La juez del grado acogió la demanda por indemnización de daño moral, puesto que considera que tal acción es procedente debido a la naturaleza –supuestamente– sancionatoria de la indemnización especial del artículo 489. En efecto, en el considerando undécimo de la sentencia definitiva, se indica que, habiéndose constatado un actuar contrario a la ley –vulneración de derechos fundamentales–, corresponde indemnizar los daños ocasionados por éste. Al respecto, señala que la indemnización especial regulada en el referido artículo 489, a propósito de la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, tiene una naturaleza sancionatoria – como si se tratase de un daño punitivo- y no compensatoria, ya que –a criterio de la juez a quo– es una manifestación del *ius puniendi* estatal. Concluye afirmando que, al contrario de lo estimado por la sentencia, la naturaleza jurídica de la indemnización especial del artículo 489 es compensatoria, sosteniendo que entender que dicha indemnización especial tiene una naturaleza sancionatoria implica un enriquecimiento sin causa, puesto que se otorgaría una suma superior al daño efectivamente sufrido por la víctima, por cuanto la juez del grado condenó a su representada por haber vulnerado las garantías constitucionales del actor, en particular la integridad física y psíquica y su honra, procediendo a establecer una indemnización especial de 8 remuneraciones mensuales y, a continuación, por igual concepto, pasó a condenar a su representada por concepto de daño moral, por lo que estima que la segunda condena importa un evidente enriquecimiento sin causa, ya que, a partir de la peculiar y errada interpretación legal practicada por la juez a quo, se está compensando un mismo daño por dos vías distintas.

Por otra parte, sostiene que la sentencia infringe también lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil, puesto que otorga una indemnización por daño moral, en particular, por el daño al honor del demandante. Señala que el artículo 2331 del Código Civil dispone que las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante,

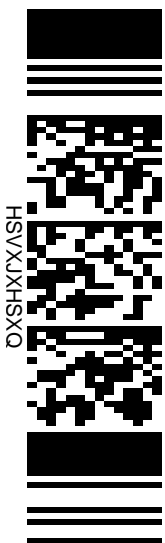




que pueda apreciarse en dinero, de lo que concluye que se restringe las indemnizaciones por daños causados al honor exclusivamente a los daños patrimoniales, excluyéndose, en consecuencia, el daño moral. No obstante, manifiesta que en el considerando undécimo de la sentencia impugnada, se señala expresamente que el daño a indemnizar corresponde a un daño en la integridad física y psíquica del actor, además de haber resultado mermado su honor, en lo que estima una clara transgresión al artículo 2331 Código Civil, norma decisoria litis para efectos de la procedencia de la indemnización por daño moral, en particular, por un daño a la honra del actor. De este modo, el quantum del daño a indemnizar no puede incorporar los perjuicios que hubiere sufrido el actor en su honor, puesto que este tipo de daños no da derecho a la indemnización por daño moral de conformidad con la ley.

En relación a la quinta causal, la de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo que interpone de forma subsidiaria de la precedente, señala que la sentencia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 459 del Código del Trabajo, en específico en su numeral cuarto, por cuanto afirma que no analiza los medios probatorios aportados por su parte, en especial, la resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades de la Ley N° 16.744 y licencias médicas.

Indica que a efectos de determinar la causalidad entre el daño moral y las conductas de su representada, la juez del grado se fundó únicamente en el peritaje psicológico, en el que se indica que el actor tiene un daño psicológico, directamente relacionado con los hechos que ha pasado, por falta de cuidado y protección por parte de la Universidad durante la investigación, por lo que afirma que la sentencia contiene una fundamentación parcial o incompleta, puesto que no analizó la prueba que incorporó su parte, la cual además tenía el carácter de relevante para efectos de la determinación de causalidad del daño moral. Señala que su representada incorporó en la audiencia de juicio la Resolución N°3353858 de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la cual calificó que la enfermedad del denunciante no tenía origen laboral, siendo dicho documento sólo enunciado en el considerando cuarto de la sentencia, pero no fue analizado en cuanto a su contenido y menos

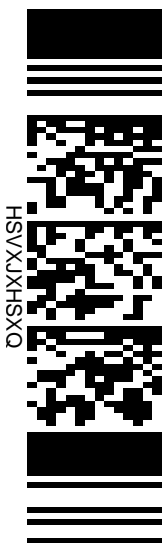


aún contrastado con la demás prueba aportada, como tampoco analizó el contenido de las licencias médicas, adoleciendo así la sentencia de una fundamentación incompleta.

Asegura que para dar cumplimiento a lo establecido en el número 4 del referido artículo 459, la juez del grado debió analizar la prueba antes referida y luego contraexaminarla y ponderarla con el informe del peritaje psicológico, luego de lo cual debió haber asignado a cada medio probatorio en particular un peso o valor determinado, cuestión que debió haber hecho conforme a los criterios de la sana crítica, para finalmente realizar el proceso de fijar los hechos asentados en la sentencia. Agrega que la sentencia, al no analizar la prueba documental señalada incurrió en el vicio de nulidad que denuncia, toda vez que la prueba documental desacredita el nexo causal existe entre alguna conducta de la Universidad y el daño psicológico afirmado por el peritaje. Es más, la juez del grado no realizó un análisis en relación con la tesis planteada por su parte.

Sostiene que al condenar a su representada al pago de una indemnización por daño moral, la juez del grado indicó que las medidas vulneratorias habrían afectado la integridad física y psíquica del actor, además de haber mermado su honor. De este modo la sentencia carece de una motivación fáctica mínima en materia de daño a la integridad física del demandante. En este sentido, asegura que la sentencia no contiene razonamiento alguno que permita establecer un daño a la integridad física, no existiendo ningún medio probatorio en tal sentido. Es más, a este respecto, la sentencia carece de toda consideración en cuanto al hecho a acreditar, los medios que dicen relación con éste, el análisis de aquellos y menos aún una demostración de cómo y por qué los medios probatorios permiten tal conclusión.

Finalmente, en relación a la sexta y séptima causales, interpuestas de forma conjunta, esto es, la del artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 del Código del Trabajo, por cuanto vuelve a aseverar que la sentencia no analizó toda la prueba rendida, en particular, el contrato de trabajo y la carta de despido indirecto del actor, para determinar la fecha de inicio y de término de los servicios, y la del artículo 477, dado que estima que la sentencia infringió

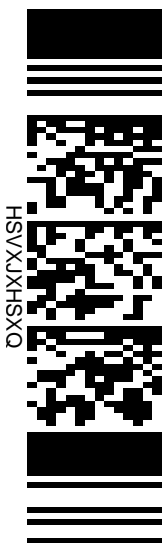


aquello establecido tanto en el inciso cuarto del artículo 162 como en el artículo 172, ambos del Código del Trabajo.

Sostiene que del contrato de trabajo del denunciante y de la carta de autodespido -medios de pruebas incorporados por ambas partes en la audiencia de juicio- es posible concluir, indubitadamente, que la fecha de inicio de la relación laboral se verificó el día 1 de marzo de 2010. Asimismo, de la carta en la que el actor comunicó a su representada que la fecha de término de los servicios se verificó el día 5 de septiembre de 2018. Que, así las cosas, de los documentos señalados se obtiene que la relación laboral entre las partes estuvo vigente por el período de 8 años, 6 meses y 4 días, lo que le otorgaba derecho al actor a percibir una indemnización legal por años de servicio, conforme lo establece el inciso 4° del artículo 162 del Código del Trabajo, de 9 años y no de 11 como se deja establecido en la sentencia.

Sostiene entonces que el vicio que alega ha influido en la determinación de la indemnización legal por años de servicio, pues se ha concedido por este concepto la suma de \$27.032.088 (que equivalen a 11 años multiplicados por 90 Unidades de Fomento, que a esa fecha equivalían a la suma de \$2.457.463), en circunstancia que se debió otorgar la suma de \$22.117.167. Adicionalmente, manifiesta que este yerro también impacta el recargo legal establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, puesto que este equivale al 50% de la indemnización legal por años de servicio. De este modo, la suma que correspondería pagar por este concepto equivale a \$11.058.584 y no \$13.516.044 como se otorgó en la sentencia. Adicionalmente, de no haberse infringido lo establecido en el inciso 4° del artículo 162 del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 172 del mismo cuerpo legal, se habría llegado a la conclusión de que lo que le corresponde al actor por concepto de la indemnización sustitutiva del aviso previo, es la suma de \$2.457.463.

**Segundo:** Que, en cuanto a las 2 primeras causales, esto es, aquellas de las letras c) y e) del artículo 478 del Código del Trabajo, ésta última en relación con el N° 4 del artículo 459 del mismo cuerpo de leyes, la recurrente las ha interpuesto de forma conjunta. Se hace necesario hacer una referencia a lo planteado por la recurrente en cuanto a que estas causales, aparte de interponerlas de forma



conjunta, las formula “*de manera simplemente simultánea*”, según manifiesta, pero lo cierto es que dicha forma de invocar las causales no existe.

En efecto, de la mera lectura del inciso final del artículo 478 del Código del Trabajo se desprende lo anterior, por cuanto se establece que: “*Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente*”, por lo que solo cabe concluir que es evidente que, de las dos alternativas que la citada norma ofrece, las causales han sido interpuestas de forma conjunta.

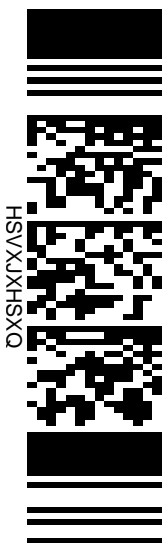
La invocación conjunta de dos causales produce el efecto, desde luego, que se deben acoger ambas, ya que al ser conjuntas, ello es porque el recurrente estima que las dos concurren. Por ende, si alguna se desecha, por ese solo motivo, la segunda tampoco puede prosperar.

Consecuente con lo señalado, ambas causales deben ser revisadas y resueltas de forma conjunta.

En el caso de la primera de las causales invocadas, la de la letra c) del artículo 478, sabido es que, para que pueda prosperar y eventualmente configurarse, los hechos asentados en el grado deben permanecer inamovibles, esto es, sin que puedan ser modificados.

Como ya se dijo, la recurrente sostiene que la separación del actor del ejercicio de sus labores fue una medida idónea, necesaria y proporcional, atendidos los argumentos que expone en su recurso.

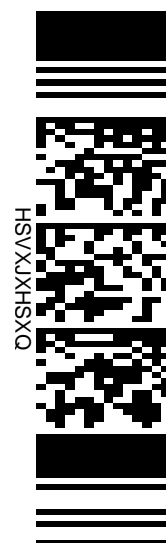
Sin embargo, dichos argumentos van en directa contradicción con los hechos establecidos en el grado, por cuanto la sentencia en su considerando séptimo reza que “... *a juicio de esta sentenciadora la medida de suspender de sus funciones al actor, con la sola existencia de las denuncias generadas inicialmente (incluso previa ratificación), resultó ser una medida desproporcionada, y vulneratoria de los mínimos resguardos al debido proceso, a los que el actor y cualquier persona objeto de una investigación seguida en su contra tiene derecho ... Que asimismo es el propio reglamento interno de orden higiene y seguridad en su título XII el que plantea el Procedimiento al que se someterán las denuncias por acoso sexual, medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de ocurrencia. Así las cosas el artículo 18 de dicho cuerpo normativo*



*expone que la denuncia deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del denunciante o afectado. Que además dicha norma expresa las posibles medidas a adoptar por parte de la Universidad ante una denuncia de acoso sexual, dentro de las cuales no se lee la posibilidad de ser separado de sus funciones, lo que es de suyo concordante a lo que narra el artículo 12 del Código de Ética del centro educacional denunciado ... Que si analizamos las normas supracitadas en armonía a la investigación de la que fue objeto el actor, es dable arribar a la conclusión que efectivamente en la especie el actor no tuvo acceso a un procedimiento investigativo celebrado conforme a las normas que rigen las investigaciones de las denuncias que se le imputan, aquello en atención a que primeramente resulta cuestionable el actuar de la demandada, respecto a la decisión de suspender al actor de sus funciones, amparado en una presunta figura de permiso con goce de remuneraciones, aquello unido a que por los propios dichos de los testigos, en especial los dichos del señor Campos, quedó acreditado en estrados que el actor nunca solicitó un permiso en esas condiciones a la entidad educacional de la que depende, sin perjuicio de lo cual la denunciada adoptó la decisión de “separarlo de sus funciones” con el sólo mérito de las denuncias comunicadas al patronal por la asamblea requirente, e independiente de la seriedad de las mismas, la temporalidad de aquellas o el vínculo existente entre quien ejercía la denuncia y el denunciado ... Luego en ese escenario a juicio de esta sentenciadora recibida que fue la denuncia por parte de la entidad educacional denunciada, resultaba lógico que aquella adoptara las medidas conducentes a dar cobertura a los requerimientos de los denunciantes, pero no por ello perder de vista el resguardo a los derechos mínimos que le asistían al denunciado, actor de autos, entre los cuales se pueden citar al menos: el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso y el principio de ser sometido a un procedimiento de investigación racional y justo, lo que en la especie como se ha señalado no ocurrió. No es proporcional a los hechos que fueron denunciados, el accionar que la entidad educacional llevó a cabo, más allá del actuar apartado de las normas que rigen todo proceso investigativo por hechos de esta índole, y que se encuentran sumamente reglados en el*

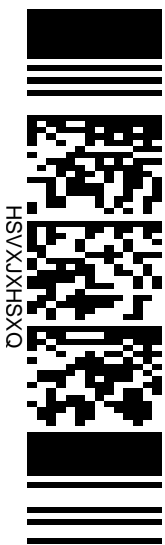


*Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, sino que por cualquier procedimiento investigativo de este tenor. Sino que principalmente porque no puede obviarse un antecedente que a juicio de esta sentenciadora es de suyo relevante y que se une a la entidad de las denuncias y la medida cautelar decretada, si entendemos la separación del actor como una medida cautelar. Que en ese orden de ideas si entendemos la investigación llevada a cabo por la entidad educacional como cualquier investigación de “hechos punibles”, forzoso resulta entender que para cualquier persona sujeta a una investigación y que puede ser objeto de alguna medida cautelar, lo mínimo que se puede exigir para que aquella sea decretada es tener por acreditada al menos la participación del denunciado en los hechos, bajo alguna hipótesis de participación. Que en el caso de marras, la denunciada sólo tuvo en consideración las denuncias ejercidas en contra del actor, las que al menos dos de ellas no cumplían el mínimo estándar de exigencia establecida por el propio reglamento de ética, toda vez que lo eran anónimas, y de suyo de larga data. Sino que además respecto de la tercera de ellas no se encuadraba en un hecho que pudiese ser calificado como constitutivo de acoso sexual, y el último de ellos, si bien podía encontrar sustento en un accionar constitutivo de violencia de género, aquel tenía una data de más de un año y seis meses, y fue denunciado por una alumna a quien el actor no ejercía docencia de manera directa, por lo que la decisión adoptada por la denunciada, en cuanto a separar al actor de sus funciones, sin duda fue una decisión desproporcionada, que más bien a juicio de esta sentenciadora obedeció a una necesidad del centro educacional de lograr un acuerdo con la asamblea aludida para obtener que esta última depusiera la “toma feminista” que ya llevaba un largo período de tiempo, no siendo en tal sentido una medida proporcionada ni necesaria. Que a mayor abundamiento de lo anterior y habiéndose logrado la convicción de haber sido el actor objeto de un actuar desproporcionado por parte de su empleador, el que trae como consecuencia haber sido este objeto de un proceso investigativo apartado de las normas mínimas de debido proceso, a las que cualquier ciudadano objeto de persecución sancionatoria sea protagonista, trae como consecuencia lógica la veracidad de los dichos del actor, en cuanto tal le fue*



*negado el trabajo convenido, que la denunciada no logró acreditar en estrados la proporcionalidad de la medida adoptada, en cuanto a separar al actor de sus funciones, por medio de la “figura de permiso con goce de remuneraciones”, luego como podría el actor desempeñar sus funciones desde su domicilio, si sus funciones necesariamente requieren de su presencia en aula, dado su rol de docente ... Que en cuanto a la denuncia proferida por el actor, en cuanto a que la denunciada no habría adoptado medidas tendientes a resguardar su imagen, aquello de igual manera ha quedado acreditado, ...*

*Más adelante, en el primer párrafo de su considerando décimo, la sentencia consigna “Que lo anterior, permite despejar toda duda en orden a cuales fueron las motivaciones que tuvo el actor para proceder a valerse de la facultad que le consagra el artículo 171 del Código del Trabajo y la existencia del ilícito laboral continuo que finalmente deviene en su decisión de poner término al mismo mediante la aludida decisión drástica y dramática de poner término a su vínculo laboral, renunciando asimismo el propio trabajador a su derecho de estabilidad relativa del empleo, todo ello derivado de que en el proceso investigativo del cual fue objeto el actor sin duda alguna no se respetaron las garantías mínimas de respeto al honor, donde sin un debido proceso se le separa de sus funciones sin posibilidad de ejercer un derecho a defensa real inmediato, sin pronunciamiento previo de la autoridad competente para ello, con publicidad, con imputaciones en extremo graves que inequívocamente marcan de forma negativa en esta sociedad, tanto desde el punto vista personal como profesional, y dejan una huella imborrable dada la connotación pública que tomaron los hechos imputados no sólo al actor sino que a un número no menor de docentes de la denunciada, conforme se ha visto reflejado en el considerando anterior, razón por la cual es posible dar por establecido que el actuar de la denunciada y del cual fue objeto el actor y que culminó con su decisión de auto despedirse fue vulneratorio de las garantías de Integridad física y psíquica como aquella de respeto y protección del honor de éste de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la República, y se decretaran las medidas reparatorias e*



*indemnizatorias que se indicarán en la parte resolutive de esta sentencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo.”*

Atendido lo señalado, en cuanto a que la fundamentación sobre la que discurre la recurrente se dirige evidentemente contra los hechos establecidos en el grado, la causal alegada no se configura y debe ser desechada.

Consecuente con el rechazo de la primera causal, la segunda también debe ser desestimada por cuanto, como ya se dijo, al haber sido invocadas de forma conjunta, el rechazo de una provoca la caída de la otra.

Sin perjuicio de lo señalado, se hará una breve referencia al fondo de esta segunda causal, especialmente por cuanto la recurrente ha invocado esta misma causal por separado y de forma diversa, como ya se dijo en el considerando primero precedente.

Que, como se ha visto, se ha invocado la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 N°4 del mismo texto legal, en un procedimiento de tutela laboral, que se rige por las normas de los artículos 485 a 495 del señalado Código, siendo este último el que formula las exigencias que la sentencia debe contener en su parte resolutive.

Sucede que el artículo 478 letra e) dispone: *“El recurso de nulidad procederá, además: ...e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda...”*.

Como se sabe, el artículo 459 regula los requisitos de la sentencia en el procedimiento de aplicación general, el artículo 495 se aplica en el procedimiento de tutela y, finalmente, el artículo 501, todos ellos del Código del Ramo, en el procedimiento monitorio. Entonces, la causal del citado artículo 478 claramente distingue entre los requisitos para su procedencia, según sea el tipo de procedimiento de que se trate, por lo que es incorrecto invocar el artículo 459 N°4 en un procedimiento como el presente, que según se indicó es de tutela laboral y no uno ordinario laboral, o de aplicación general y por lo tanto, el recurso de anulación por el motivo de que se trata se puede basar únicamente en infracción del artículo 495 del





Código Laboral, según se desprende del tenor literal del citado artículo 478 letra e), disposición que no fue aludida en la causal impetrada.

En suma, además de todo lo que se ha dicho previamente, se ha invocado en el presente caso una causal improcedente, al tenor expreso del citado artículo 478 letra e).

Que, no obstante, aún si se pensare que la causal del artículo 478 letra e) resulta procedente en un proceso sobre tutela laboral, como el que nos ocupa, sólo como hipótesis de trabajo, hay que decir que en el presente caso dicho motivo no concurre y, de todos modos, la causal fue mal invocada, toda vez que la pretensión del recurrente es que esta Corte valore nuevamente la prueba que subraya el litigante en su arbitrio, lo que resulta improcedente en esta sede, pues este recurso es de impugnación y no de mérito.

Entonces, la forma de abordar el problema ha sido, además, incorrecta por parte de la recurrente también en el sentido expresado, pues pretende que se formule un nuevo juicio sobre la prueba que ya fue apreciada por la juez de base, lo que resulta improcedente en esta sede de nulidad.

De lo señalado no queda sino concluir que esta causal carece de fundamento, por lo que será rechazada.

**Tercero:** Que, en cuanto a la tercera causal, la del artículo 478 letra b) que se interpone de forma subsidiaria a la segunda, es menester señalar lo siguiente.

Como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, para que se presente este motivo de nulidad, es necesario que concurren dos requisitos que son esenciales o básicos. En primer término, la ley requiere que se produzca una infracción manifiesta, y de las reglas de la sana crítica, producida desde luego en el ejercicio de la tarea de apreciar las evidencias. Esto significa que el vicio debe ser ostensible, notorio, visible, que debe desprenderse de la simple lectura del fallo, lo que en el presente caso no ocurre, puesto que el que se impugna no presenta esa falencia, en la forma dicha, y por cierto, la recurrente no logra demostrarlo.

Que, luego, como es obvio, se requiere que haya una transgresión de alguna o varias reglas de la sana crítica, lo que la parte recurrente debe señalar en forma clara y precisa, esto es, si



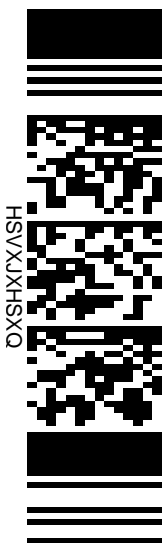
han sido las razones jurídicas, las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, cuestión que en el presente caso ocurre, por cuanto la recurrente ha señalado que se han vulnerado las reglas de la lógica, por falta de coherencia, en particular por incurrir en una contradicción en el establecimiento de los hechos que se dan por acreditados, más, luego de su afirmación, no explica de qué forma se ha producido tal transgresión, limitándose a señalar que *“las infracciones en las que incurre la juez del grado son manifiestas, puesto que basta de la sola lectura del considerando décimo segundo de la sentencia, para determinar una clara contradicción entre el medio probatorio y la conclusión que de éste se desprenda, como también una falta de derivación lógica entre uno y otro”*.

La recurrente hace el ejercicio al revés, afirmando que es el fallo el que no se apega a las reglas de la sana crítica, pero sin lograr explicar la forma como las que invoca en este caso particular se ha visto alterada y, por lo mismo, no demuestra la transgresión.

Adicionalmente, el recurso incursiona en argumentos que dicen relación con otras causales, como omisión de análisis de determinada prueba e incluso repite argumentos entregados a raíz del primer motivo de anulación, todo lo cual es equivocado.

Que, finalmente, cabe consignar que el fundamento de la causal tampoco es efectivo, pues el fallo se ha hecho cargo de toda la prueba rendida, pues así se desprende de su simple lectura, y sobre lo que se reprocha, en el considerando décimo cuarto se deja constancia que las demás pruebas rendidas en autos en nada alteran lo antes establecido y, por el contrario, refuerzan las conclusiones a que se ha llegado en los considerandos precedentes, lo que da cuenta de que toda ella fue considerada, al revés de lo que pretende la recurrente.

Que, por otra parte, como esta Corte lo ha hecho presente en reiteradas oportunidades, la circunstancia de que no se escribire el contenido de una probanza, en forma total o solo parcial, no significa que el tribunal no la haya apreciado, ya que apreciación o ponderación de evidencia no es sinónimo de escrituración o transcripción de la misma. Si un juez afirma que analizó toda la evidencia, o si señala que las restantes pruebas del juicio no alteran lo decidido, como es común que se haga, es evidente que dicho



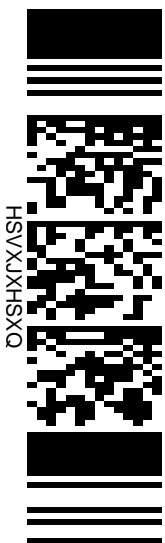
aserto tiene su fundamento en el análisis de todos los medios de prueba existentes en el proceso, y reproducir prueba que no es útil se transforma, a su vez, en un trámite también de poca utilidad.

Sobre la base de lo dicho, el tercer motivo de nulidad entablado tampoco concurre en el presente caso, y es desechado.

**Cuarto:** Que, en cuanto a la cuarta, quinta y sexta causales invocadas, es menester revisar las tres de una sola vez de forma conjunta, por cuanto la última causal de este grupo, que se refiere a la del artículo 478 letra e) cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el número 4 del artículo 459 por la falta de análisis de toda la prueba rendida, se ha invocado de forma conjunta con las causales cuarta y quinta, siendo la cuarta subsidiaria de la primera, y la quinta de la cuarta.

Como ya se dijo, la cuarta causal es aquella del artículo 477 del Código del Trabajo en su hipótesis de infracción de ley en relación con los artículos 489 del Código del Trabajo y 2331 del Código Civil, y la quinta la de la letra e) del artículo 478, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el N° 4 del artículo 459, en este caso, con falta de análisis de toda la prueba rendida y de los razonamientos que conducen a tal estimación.

Según ya se fundamentó latamente en el considerando segundo, fundamentaciones que no se reiterarán aquí por economía procesal, la causal de la letra e) del artículo 478 resulta improcedente en marras, ya sea porque se estime que no procede atendida la naturaleza del fondo de la cuestión debatida, esto es, tutela de derechos fundamentales, o bien porque, admitiendo que pudiere interponer aún en este tipo de juicio, la recurrente aborda el problema de manera incorrecta pues no sólo no ofreció prueba de la causal, sino que ha hecho lo no permitido en un recurso de nulidad, que es el análisis particular de evidencias, en cuanto ellas demostrarían su tesis en torno a la conducta de su representada, en términos tales que permitirían el rechazo de la acción. El ejercicio de analizar en forma particular las pruebas rendidas en el juicio es propio de una apelación, pero no de un recurso de anulación, unido a que el raciocinio valorativo es privativo del órgano jurisdiccional.



Sin perjuicio de lo señalado, en relación al fondo de la cuarta causal ya indicada, es menester señalar que no existe tal incompatibilidad legal entre aquellas indemnizaciones como pretende el recurrente. La cuestión de fondo que trasluce de sus alegaciones viene a ser esa, la incompatibilidad, por cuanto alega un presunto enriquecimiento sin causa, que no se configura atendido los fundamentos vertidos en el considerando décimo primero de la sentencia, que esta Corte comparte. Por ende, las argumentaciones de la recurrente no logran desvirtuar lo anterior.

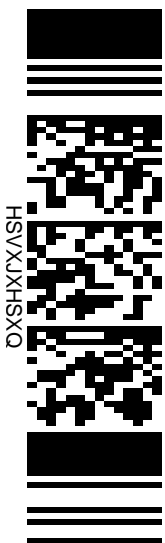
De lo señalado no queda sino concluir que esta causal no se encuentra en términos de prosperar, por lo que es rechazada.

Y, al ser rechazada la cuarta causal, corren la misma suerte la quinta y sexta causales ya enunciadas, por haber sido invocadas de forma conjunta con aquella.

**Quinto:** Que, en séptimo y último término la recurrente invocó, nuevamente, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo en su hipótesis de infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de forma conjunta con la sexta causal referida en el considerando precedente que a su vez se refiere a la del artículo 478 letra e) cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el número 4 del artículo 459 por la falta de análisis de toda la prueba rendida.

Habiéndose rechazado ésta última según se expresa en el considerando cuarto, no procede sino rechazar asimismo esta séptima causal, por cuanto al haber sido interpuestas de forma conjunta, el rechazo de una trae como necesaria e inevitable consecuencia la caída de la otra, como ya se dijo.

**Sexto:** Que, con todo, no obstante haber errado la recurrente tanto en la forma de interposición de la causal que invocó en su última alegación, como en la causal misma, le asiste razón en cuanto a que la sentencia estableció en la letra b) de su numeral I de su parte resolutive, que corresponde al actor una indemnización por años de servicios equivalente a 11 años en los términos de los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo, en circunstancia que solo son nueve los años para ese cálculo, según se señala más adelante, con el tope establecido en el inciso final de esta última norma que reza *“Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas*



*en este título, no se considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo”, tope al que hace referencia la propia sentencia en la parte final del segundo párrafo de su considerando décimo.*

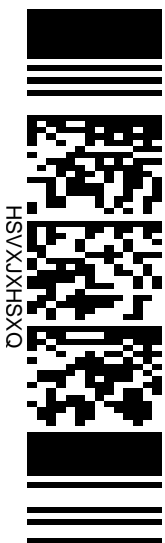
Lo anterior, por cuanto es un hecho no controvertido que el actor prestó servicios para la demandada desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 5 de septiembre de 2018, lo que arroja un periodo de 8 años, 6 meses y 4 días, otorgándole consecuentemente derecho a percibir una indemnización por años de servicio equivalente a 9 años, en los términos que la recurrente lo plantea en su recurso, siempre con el tope de las referidas 90 unidades de fomento, más no 11 años como erradamente establece la sentencia siguiendo lo improcedentemente pedido por la actora en su libelo.

Consecuente con lo precedentemente manifestado, corresponde al actor la suma de \$ 22.117.167 por concepto de indemnización por años de servicio, más el recargo legal del artículo 172 del Código del Trabajo equivalente al 50% de la señalada indemnización que asciende consecuentemente a la suma de \$ 11.058.584, y la suma de \$ 2.457.463 por concepto de la indemnización sustitutiva del aviso previo, según lo pide la recurrente.

En consecuencia, atendido lo preceptuado en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, en cuanto a que esta Corte, de oficio, podrá acoger el recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los señalados en el artículo 478, se acogerá el recurso fundado en la causal de la letra b) del referido artículo, por no haber analizado la prueba rendida en su mérito de acuerdo a las reglas de la sana crítica, únicamente en relación al aspecto señalado, y exclusivamente en cuanto a enmendar lo señalado precedentemente y resolver conforme a derecho.

**Séptimo:** Que como corolario de lo que se viene diciendo, se acogerá el recurso deducido, únicamente en lo señalado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 478 letra e), 479 inciso final, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **acoge** el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve dictada por



el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa caratulada "Núñez con Universidad Central de Chile", RIT N° T-1789-2018, la que se **invalida**, sólo en cuanto condena a la demandada a pagar al actor las sumas de \$ 27.032.088.- por concepto de indemnización por 11 años de servicio, \$ 13.516.044.- por concepto del recargo legal del artículo 172 del Código del Trabajo, y \$ 2.4657.463.- (sic) por concepto de la indemnización sustitutiva del aviso previo, dictándose a continuación, en forma separada y sin nueva vista, la respectiva sentencia de reemplazo.

**Se rechaza**, en lo demás, el aludido recurso.

Regístrese y notifíquese

Redacción del abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia  
N° Laboral - Cobranza-2476-2019.

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro Sr. Rafael Andrade Díaz, pese a haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia en esta Corte, debido a que asumió funciones como ministro titular en la Corte de Apelaciones de Concepción.

En Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

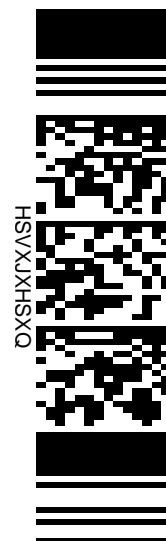
TOMAS GUILLERMO GRAY  
GARIAZZO  
MINISTRO  
Fecha: 30/06/2021 12:55:36

JORGE ENRIQUE JUAN BENITEZ  
URRUTIA  
ABOGADO  
Fecha: 30/06/2021 14:01:44



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

**Vistos:**

Se mantiene la sentencia anulada de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, en su parte expositiva y considerativa.

**Y se tiene además presente:**

1º) Lo razonado en el motivo sexto del fallo de nulidad, que se da por reproducido para estos efectos, y

2º) Que, en consecuencia, encontrándose establecido en la causa que el actor se desempeñó para la demandada, desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 5 de septiembre de 2018, lo que arroja un periodo de 8 años, 6 meses y 4 días, le corresponde percibir la suma de \$ 22.117.167 por concepto de indemnización por años de servicio, más el recargo legal del artículo 172 del Código del Trabajo equivalente al 50% de la señalada indemnización que asciende consecuentemente a la suma de \$ 11.058.584, y la suma de \$ 2.457.463 por concepto de la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 7 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE la denuncia por tutela laboral, indemnización por daño moral y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por don CARLOS NUÑEZ SANDOVAL, en contra de UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE, representada legalmente por su Rector don Santiago González Larraín, todos ya individualizados, y habiéndose vulnerado la integridad física y psíquica y la honra del actor, señaladas en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, se condena a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:

a) La suma de \$27.036.048.- (veintisiete millones treinta y seis mil cuarenta y ocho pesos), por concepto de indemnización prevista en





dicha norma, sobre la base de ocho remuneraciones, considerando una remuneración bruta mensual de \$3.379.506.-

b) Indemnización establecida en el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo, en relación a los artículos 162, 163, 171 y 172 del mismo cuerpo legal, ascendente a \$ 2.457.463.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo; la suma de \$ 22.117.167.- por indemnización por nueve años de servicios; más el recargo legal equivalente a \$ 11.058.584.-

c) La suma de \$ 30.000.000.-, por concepto de Daño Moral.

d) Remuneraciones adeudadas devengadas por concepto de los excedentes ya indicados, por la suma de \$ 19.766.695.-

e) La suma de \$ 1.723.087.- por concepto de feriado proporcional.

**II.-** Que las sumas que esta sentencia ordene pagar se reajustarán y devengarán intereses de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

**III.-** Que habiendo resultado totalmente vencida la denunciada se le condena en costas las que se cifran desde ya en la suma de \$ 1.000.000 (un millón de pesos).

**IV.-** Una vez que la presente sentencia adquiera el carácter de firme y ejecutoriada cúmplase ella dentro de quinto día bajo apercibimiento de remitirse la causa a la Judicatura de cobranza laboral y previsional de esta ciudad conforme lo dispone el artículo 462 del Código del Trabajo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

N°Laboral - Cobranza-2476-2019.

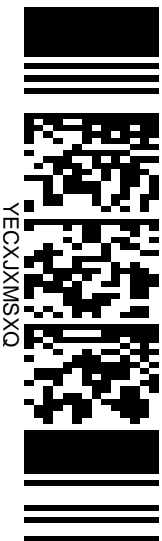
Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro Sr. Rafael Andrade Díaz, pese a haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia en esta Corte, debido a que asumió funciones como ministro titular en la Corte de Apelaciones de Concepción.



En Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

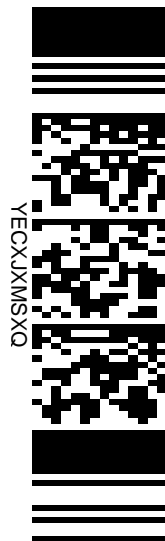
TOMAS GUILLERMO GRAY  
GARIAZZO  
MINISTRO  
Fecha: 30/06/2021 12:55:40

JORGE ENRIQUE JUAN BENITEZ  
URRUTIA  
ABOGADO  
Fecha: 30/06/2021 14:01:53



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>